

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA INSEGURIDAD

Una de Las banderas dell neoliberalismo salinista fue: no al Estado obeso (populista e ineficiente), sí al Estado fuerte (promotor y garantía de eficacia, justicia y libertad). Sin embargo, en una de Las áreas de responsabilidad del Estado tan elemental e importante como es la impartición de justicia y la protección del ciudadano en su persona, propiedad y derechos, la realidad del sexenio no ha correspondido, ni de lejos, a la promesa. En la práctica y en esa materia, los mexicanos simplemente pasamos del Estado obeso, al Estado inútil.

Un indicador que da idea de lo dramático de la situación mexicana en relación a la inseguridad ciudadana, a la ineffectividad de su policía frente al aumento de la violencia criminal, apareció en el último número del año pasado de *The Economics* (diciembre 25, 1993, enero 7, 1994, p. 40). En un cuadro de indicadores sociales publicados por ese semanario británico y en donde se compara la situación de 1990 en 22 países -que van de Estados Unidos, Suecia y Suiza, Brasil, China e India-, resulta que México es el que tiene la tasa más lata de asesinatos ;30.7 por cada cien mil habitantes del sexo masculino! La cifra es un poco más que la de Brasil, el doble que la estadounidense, seis veces superior a la de la India, 25 veces más que la española y 43 veces mayor que la de Japón. ¿Ese es el Estado fuerte prometido? ¿El sistema político más estable de América Latina en el siglo XX termina con uno de los mayores índices

de violencia cotidiana? En México, la inseguridad y la justicia corrupta han sido, desde siempre, dos de las características que han hecho más difícil y miserable la vida cotidiana de los pobres en la ciudad y el campo. Sin embargo, en los últimos tiempos, la sensación -y la realidad- de la inseguridad y de la inutilidad de la policía y del sistema todo de impartición de justicia, se ha extendido hacia las zonas superiores de la pirámide social. Primero se propagó hacia los sectores medios, y finalmente, en 1993 y 1994, rompió la barrera histórica y alcanzó también a los grupos más altos: a la propia élite. El asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo en Guadalajara, el secuestro del banquero Alfredo Harp Helú y, sobre todo, el asesinato del candidato presidencial del PRI -y según la tradición, heredero del enorme poder presidencial- Luis Donaldo Colosio, son otros tantos símbolos de esta perversa, indeseada e indeseable, democratización de la inseguridad mexicana, del resquebrajamiento de un orden legal que siempre había estado ausente entre las clases populares, pero que, a medias, había funcionado para las clases medias y, sobre todo, para las minorías privilegiadas. Hoy nadie, en prácticamente ningún lugar de México, tiene razones para sentirse realmente libre de temor ante el crimen individual u organizado. Al contrario, hay una sensación generalizada de indefensión, y un natural malestar con una estructura gubernamental cada vez más capaz y dispuesta a extraer recursos de la sociedad mediante impuestos, pero cada vez menos dispuesta y menos capaz de

devolvérselos en los servicios a los que tiene derechos como son el de una policía eficaz y una justicia imparcial y expedita.

A la actual administración no le agrada que le definan como neoliberal a su modelo de economía política, prefiere el término de liberalismo social. Sea como fuere, la pretensión de que vivimos un tipo de política liberal es sólo eso, una mera pretensión, pues la realidad mexicana actual no pasa la prueba del liberalismo. En efecto, como doctrina y como práctica, el liberalismo de cualquier clase y contenido, lo que busca .su razón de ser- es crear o mantener Las condiciones óptimas para que el individuo se libere de los antiguos constreñimientos externos a su libertad de acción -los del grupo, de la iglesia, de la autoridad despótica, del temor y la violencia-, y puede desarrollar plenamente sus capacidades creadoras, sin altruismos y buscando su propio beneficio, pero finalmente beneficiando también al conjunto social al que pertenece.

En la visión liberal dell mundo, y para usar Las palabras de Thomas Paine, el Estado -incluso el mejor de los estados- resulta ser un mal necesario. Desde la perspectiva liberal, el Estado siempre tiende a excederse en su uso dell poder y debe ser considerado como un mal, como un enemigo potencial o efectivo de la libertada individual, y por ello hay que vigilarlo y limitarlo estructuralmente a través de la división de los poderes. Sin embargo, también resulta que ese enemigo de la libertad, es a la vez, una institución indispensable e insustituible para crear y mantener las condiciones que permitan el ejercicio efectivo, cotidiano, de esa libertad y creatividad

individual. En efecto, el Estado a través del ejército protege a la sociedad de sus enemigos externos y a través de sus policías y tribunales, la protege de sus enemigos internos: los criminales y otros violadores de la ley.

Así pues, y siempre desde la perspectiva liberal, si la autoridad logra dar forma a una institucionalización efectiva de sus cuerpos de policías y de sus tribunales, la razón de ser tanto autoridades como de gobierno y Estado, prácticamente desaparece. Deja de ser un mal necesario para convertirse en un mal a secas. Una sociedad donde no impera de manera relativamente satisfactoria la ley y orden, donde rutinariamente se vive de manera peligrosa en un "estado de naturaleza", según la visión de Thomas Hobbes, uno de los padres del liberalismo-, entonces se trata de una sociedad con un Estado inútil, ilegítimo e indigno de ser obedecido y preservado.

La vida cotidiana en ese México de fin de siglo se esta convirtiendo en algo muy parecido a la vida dentro de un Estado impotente, donde el individuo se mueve en medio de la inseguridad, es decir, en algo muy cercano al "Estado de naturaleza". Para los liberales, una de Las misiones centrales del Estado -y que en buena medida lo justifica- y de la que no puede abdicar sin vulnerar su naturaleza misma, consiste en proveer la seguridad de todos y cada uno de los integrantes de este "pacto social" en que el ciudadano otorga recursos, y obediencia a Las autoridades a cambio de que éstas cumplan satisfactoriamente con sus obligaciones elementales. Sin esa confianza en los códigos legales y en Las fuerzas de seguridad

encargadas de velar por su cumplimiento, la tan anhelada libertad individual, simplemente queda trunca.

Al descuido histórico e injustificable de los gobiernos postrevolucionarios en materia de policía e impartición de justicia, y que produjo corrupción e incompetencia en abundancia, se le viene a añadir hoy un elemento externo que hace todavía más difícil que realmente en México tome forma ese supuesto "Estado fuerte" capaz no sólo de privatizar y cobrar impuestos, sino de enfrentar con éxito a la delincuencia. Ese elemento es el narcotráfico . Si hemos de creer lo contenido en el Informe Confidencial 1 de la Procuraduría General de la República (*La Jornada*, 16 de mayo), resulta que este año los ingresos brutos de los varios grupos de narcotraficantes que operan en México, puede ascender a los 30 mil millones de dólares. La magnitud de la cifra es impresionante, pues representa prácticamente el mismo monto que Las reservas dell Banco de México, y que fueron reportadas en 30.5 mil millones de dólares a fines de marzo.

Un narcotráfico tan fuerte como el Banco de México, bien puede penetrar todas Las estructuras gubernamentales que considere necesarias: a los aparatos de seguridad -como quedó demostrado el sexenio pasado cuando, para acabar con la gangrena dentro de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fue necesaria destruirla-, a la Procuraduría General de la República, a los gobiernos estatales, a Las policías, al ejército a todos.

La situación es tan seria, que las propias élites se quejan ya públicamente de la inutilidad del Estado en materia de seguridad y

justicia. Es más, ese aparato estatal no sólo es incapaz de dar la seguridad que debe, sino que en realidad es ya una de las fuentes principales de inseguridad ciudadana como resultado de una corrupción galopante. El 23 de mayo, el nuevo arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, declaró tajante que, según fue informado por altos funcionarios de la PGR, resulta ya imposible para los propios mandos de esa institución saber quién, dentro de la Policía Judicial Federal, es confiable y honesto y quién está comprometido con el narcotráfico. El informe anual del Departamento de Estado correspondiente a 1993 y que acaba de ser publicado, señala: "la corrupción de funcionarios públicos [en México] sigue siendo un problema serio" (*Proceso*, 30 de mayo).

El Estado ha ido perdiendo terreno frente a la corrupción policiaca y judicial, sin embargo, poco se hizo al respecto en este sexenio, y no porque faltaran recursos económicos -el neoliberalismo está orgulloso de su superávit fiscal y de los millones de dólares gastados en el rearme del Ejército o en las campañas de propaganda en favor del TLC en Estados Unidos- sino porque faltaron recursos humanos y, sobre todo, porque faltó voluntad y sobró irresponsabilidad política. A lo largo del sexenio salinista se cambiaron subprocuradores (5) con el mismo desenfado con que se cambiaron gobernadores (17) o jefes de la policía capitalina (responsabilidad directa del presidente, vía el regente). Sin embargo, los cambios (de titulares) no cambiaron en nada la situación real: el Estado fuerte sigue brillando por su ausencia y el

Estado inútil se arraigó. Hoy, al cuarto para Las doce, cuando el sexenio está en su etapa final, el subprocurador general de la República, Mario Ruiz Massieu, exige a la Policía Judicial Federal, resultados inmediatos en forma de ultimátum: o los tres mil elementos de esa corporación actúan de inmediato contra los narcotraficantes de Las zonas donde están asignados -a los que se supone que conocen muy bien- o habrá represalias. ¿Por qué esperaron los jóvenes tecnócratas hasta ahora para hacer lo que debieron haber hecho en el momento mismo de asumir la responsabilidad del poder que con tanto afán buscaron en 1988? El fin del sexenio no es el mejor momento de iniciar el contraataque contra los enemigos de dentro -el ejército de policías y jueces corruptos- y los de fuera -el ejército de narcotraficantes y la delincuencia en general. En la agenda del proximo sexenio estos dos grandes temas, inseguridad y fallas en la procuración de justicia, junto con otros tres -desempleo, desigualdad y pobreza extrema- se encontrarán a la cabeza de los grandes problemas nacionales. Resolverlos va a ser un poco más difícil, pues el tiempo perdido no corrió en balde, pero la tarea se puede y se debe hacer, para no entrar al siglo XXI con un Estado inútil y una sociedad crispada.